

Cuadernos del Sur

AÑO 12 - N° 21

Mayo de 1996

1976 24 de marzo



Veinte años después 1996

Durante el mes de marzo pasado una multiplicidad de actos, movilizaciones, descubrimientos de placas recordatorias, clases en instituciones educacionales, minutos de silencio en las canchas de fútbol, mesas redondas, actos callejeros, de repudio a los victimarios y de homenaje a las víctimas, se desplegaron por todo el país buscando reconstruir los lazos y mecanismos sociales que vinculan a la experiencia actual con la de generaciones anteriores.

Pero fue en los días 21 a 24 —inicio de la ronda de las Madres, festival de Rock para Contar, Marcha de Antorchas y multitudinaria concentración final— que el centro político del país resultó desbordado por un sujeto social colectivo de múltiples características. La virtual ocupación de la mítica Plaza de Mayo resolvió a favor de quienes reclaman verdad y justicia lo que en los días previos se vivió como un territorio en disputa con el Gobierno Nacional.

Veinte años después de que la sociedad argentina se viera sometida por una dictadura militar que llevó al paroxismo la persecución política, la cárcel, la tortura, la desaparición de personas y el envilecimiento humano, la lucha contra el olvido y por la recuperación de la memoria adquirió una dimensión y profundidad que sobrepasó todo lo anterior.

No ha sido esto producto de la espontaneidad social.

El golpe de 1976 se constituyó en el momento culminante de un largo proceso histórico, en que militarismo y golpismo se conjugaban periódicamente en los intereses concretos del poder real para conjurar la irrupción de los sujetos sociales colectivos, que una y otra vez intentaban constituir un nuevo bloque de poder, impugnando el orden de cosas existente.

Nuestras clases dominantes y su Estado son portadoras de una larga tradición de represión y coerción —cualquier revisión histórica por superficial que esta fuere lo pondría rápidamente en evidencia—, pero nunca como en el período 1976-1983 se alcanzó lo que ahora conocemos como *terrorismo de Estado*. Nunca como entonces se llegó al nivel de exterminio de todos aquellos

hombres y mujeres que, por distintas vías y senderos, con diferentes formas y organizaciones políticas y sociales, luchaban por una vida mejor, por otra cultura, por una sociedad sin explotación ni opresión, por el futuro...

Como en otras oportunidades, como cada vez que la crisis de gobernabilidad aparecía en el horizonte inmediato, las caras públicas del golpismo recurrieron a la necesidad de "poner orden" en el desorden de la sociedad civil, en frenar la "guerrilla industrial" eufemismo vulgar para deslegitimar el poder del trabajo en las fábricas, en "reconstruir" la Nación asediada por organizaciones revolucionarias que ponían en duda la capacidad operacional de las FFAA.

Ocultaban así que en la base de estos cuestionamientos se encontraba la crisis del capitalismo local inserta en la crisis y la recesión prolongada mundial. Se trataba del agotamiento de un ciclo histórico y el consiguiente estallido de las alianzas de clase constituidas en todo el extenso período anterior, lo que dejó al descubierto los límites del modelo de desarrollo, de las estructuras y de las formas tradicionales de la dominación social. Las clases dominantes iniciaban así su propia búsqueda del nuevo bloque de poder que resolviera la crisis de hegemonía que durante décadas se desenvolviera en su interior.

Algo que recién consolidarían a partir de 1991, en el gobierno peronista actual con la implantación del Plan de Convertibilidad y la profundización de las políticas del ajuste estructural.

El golpe de 1976 y las consecuencias sociales que desencadenó resultaron la precondition necesaria para el desarrollo de un programa económico-social que, liderado por las corporaciones financieras transnacionales y el gran capital nativo y extranjero, contó con apoyaturas políticas provenientes de los partidos tradicionales y el aval y participación inexcusable de la Iglesia Católica que brindó cobertura moral a los métodos empleados.

Esté programa contenía una fuerte variable política: la ofensiva generalizada y sostenida del capital sobre el trabajo, que se abatió sobre el conjunto de conquistas que los trabajadores habían alcanzado a través de generaciones. La misma, profundizada, continúa hasta hoy, imponiendo una correlación de fuerzas sociales totalmente funcional a las necesidades de la acumulación capitalista y a la nueva configuración del poder.

Pero si en estos veinte años el programa se ha desplegado sin solución de continuidad, en los que van desde 1983 hasta nuestros días, años de recuperación democrática y del ejercicio de las libertades públicas, ha avanzado, ahora legitimado por la democracia representativa, por los espacios que fue obligado a ceder el movimiento obrero y popular.

Y no sólo en el terreno económico y político.

Toda una operación ideológica orientada a borrar la memoria colectiva, a romper esos mecanismos sociales que ligan el pasado de los individuos con el presente, fue puesta en marcha en forma paralela. Es posible reconocer en las diversas medidas adoptadas por el poder político (instrucciones del PEN a los fiscales; leyes de Punto Final y Obediencia Debida, Indulto, reconocimiento de legitimidad a la lucha antsubversiva), distintos momentos en la instrumentación de esta verdadera "tecnología del olvido", que se instala bajo la forma de amnesia. Como abolición de una memoria.

Pero no se trata de cualquier memoria, sino de aquella que en su extinción lleva a despreocuparse de los hechos acontecidos. Se impone así una prescripción que pretende reconstituir una continuidad como si nada hubiese ocurrido. *Una constitución del olvido que es a la vez conformación de una memoria cívica vigilada.*¹

De ahí que las expresiones que dan cuenta de los acontecimientos político-sociales de la década del 70 como una "guerra entre aparatos armados" o como parte de una lógica asentada en "la violencia irracional", sustento de la llamada "teoría de los dos demonios", aparecen levantadas como obstáculos para la comprensión y el reconocimiento de la totalidad de la fuerza social que estuvo desplegada en aquellos años.

La dimensión del aniquilamiento, y la meticulosidad operativa que implicó la metodología de la desaparición de personas, permiten considerar como válida una lectura que ponga de manifiesto la importancia que había adquirido la red de articulaciones sociales y políticas, que aceleradamente se estaban construyendo en los distintos espacios de confrontación (fábricas, barrios, universidades, centros de producción y extensión cultural, etc.) que cuestionaban moral y materialmente el ejercicio del poder de las clases dominantes.²

Esta operación ideológica trata de conjugar *olvido*, de la política de aniquilación, con *memoria*, de lo terrible, de lo siniestro, como un dolor que permanece y se extiende, con la capacidad de construir testigos mudos de lo ocurrido, detentadores de una culpa... y de una deuda.

Esta forma de terror, que significa la culpabilidad de las víctimas, encubierto en estas formas democráticas, se manifiesta crudamente en el sur del país donde quienes mataron a un obrero metalúrgico que reclamaba por su fuente de trabajo son puestos en libertad, mientras que cinco dirigentes metalúrgicos, compañeros del anterior, están siendo procesados.

¹ Como señala Nicole Louraux en *De la amnistía a su contrario*.

² Tal la acertada apreciación de Inés Izaguirre en *Los desaparecidos: recuperación de una identidad expropiada*

Sin embargo aún en el marco de relaciones de fuerzas muy desfavorables el movimiento social y político da muestras de reacción y resistencia en las manifestaciones que aisladas y dispersas se desarrollan por todo el país, en las marchas civiles por el asesinato de jóvenes, en los síntomas de desobediencia civil que surgen en distintos conflictos por causas locales, y en la persistencia y continuidad de los organismos de derechos humanos, particularmente de *Madres...*, pero también en la reciente formación de *HIJOS, por la identidad y la justicia, contra el olvido y el silencio*, cuya constitución es emblemática del proceso de transferencia generacional que estamos transitando.

Precisamente el mayor obstáculo que se presenta para la política de las clases dominantes, es la instalación del *no olvido*, que impide la constitución de determinados pactos —complicidades entre sectores de la sociedad civil— para borrar los hechos recientes, como forma de “desaparición”, ya no de cuerpos sino de acontecimientos históricos.

Así como desde el poder se intenta la construcción del olvido y de una suerte de memoria subordinada, desde la conciencia crítica de lo que se trata es de afirmar una memoria que se despliegue activamente, que se instale en el no olvido, en lo contrario de la amnistía, fundamentalmente en lo que esta última tiene de amnesia.

En rigor *que sólo se olvide el olvido*.

Colectivo de Gestión
Buenos Aires/Rosario, abril de 1996